

# **PLATAFORMA ELECTORAL Y PROGRAMA DE GOBIERNO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, EN SAN LUIS POTOSÍ 2024**

## **CONTEXTO NACIONAL**

Nuestro Estado, al igual que el resto del país atraviesa uno de los momentos más duros en la historia contemporánea. La crisis económica de inicio de la década se vio agravada a niveles nunca antes vistos tras la contingencia de salud provocada por la pandemia. La suma de malas decisiones se acumuló a tal grado, que en este tiempo, miles y miles de familia entraron a un luto inesperado no solo por el virus Covid19 que paralizó a nuestro país en 2020, sino también por falta de medicamentos para enfermedades en las que pelagra la vida, tales como el cáncer, así como por la escalada de violencia que ha dejado más personas fallecidas que nunca antes en la historia reciente.

Sin embargo, las crisis no son solo en materia económica, de salud y de inseguridad: las decisiones tomadas por el régimen, constituyen una clara afrenta contra las instituciones que se construyeron durante décadas y que sin duda forman parte del sustento de nuestra democracia. El continuo ataque a organizaciones de la sociedad civil, la opacidad y el retroceso en materia de transparencia, la apuesta por energías contaminantes y macro proyectos inútiles son algunos ejemplos de la ineptitud e indolencia de un gobierno que gasta de manera ineficiente en rubros que no le benefician a las familias y aplica un concepto de austeridad que implica recortes en un tema tan sensible como lo es la salud.

Además, bajo el régimen de corrupción rampante, en el que los escándalos cotidianos son disculpados sin pudor de manera pública, la injusticia ha ido ganando terreno. Existe un sistema en el que el discurso es incongruente con la acción y los ataques a todo aquél que piense diferente o llame a un cambio de rumbo representan un ataque a la pluralidad, a los consensos y contrapesos indispensables en las democracias.

Ante este panorama, el Partido Revolucionario Institucional es consciente de la responsabilidad histórica que le corresponde asumir.

En nuestro Estado, estamos comprometidos a impulsar las acciones necesarias para responder a los tiempos que se viven, dando el rumbo claro y firme que se necesita para guiar a San Luis hacia el desarrollo de las personas y familias en cada región, desde la convicción del respeto de la dignidad de las personas, estamos empeñados en la consolidación de la democracia y la justicia social, teniendo a los principios de la solidaridad y la subsidiariedad como ejes rectores de nuestros planteamientos.

## **ÍNDICE**

Introducción: Por la defensa de la soberanía estatal, la salud y la seguridad de todas las personas que habitamos San Luis Potosí

- I. La transformación del actual régimen político y el impulso a la democracia ciudadana.
- II. El combate total y frontal a la corrupción y a la impunidad.
- III. La pacificación del estado, con seguridad, respeto a los derechos humanos y justicia para todas las personas
- IV. La necesidad de un desarrollo económico con crecimiento, inclusión social y sostenibilidad; tomando en consideración a la educación, el fortalecimiento del sector salud y el posicionamiento del estado como destino turístico de primer nivel.

### **Introducción:**

#### **Por la defensa de la soberanía estatal, la salud y la seguridad de todas las personas que habitamos San Luís Potosí**

El Partido Revolucionario Institucional recabará todas las inquietudes y preocupaciones que hoy afligen a la ciudadanía. Somos plenamente conscientes de la necesidad de transformar nuestra realidad, y la situación actual de nuestro Estado, que se caracteriza por los signos siguientes:

- Un sistema político excluyente, restrictivo, y autoritario, con tendencia a acotar las libertades, la movilidad social y el desarrollo, mientras que la economía se paraliza y el sector salud se desmantela, provocando serias crisis de salubridad y de desempleo, la autoridad solamente testifica las problemáticas, mostrando incapacidad tanto operativa, ideológica y administrativamente, es una realidad que el gobierno actual ha sido incapaz de generar los incentivos adecuados para generar los acuerdos y los consensos que hacen falta.
- Una profunda crisis de legitimidad social que aqueja, cada día que pasa, a las instituciones del Estado, incluyendo a los partidos políticos. Crisis que atenta contra la estabilidad social, la gobernabilidad política y el orden democrático.
- Una generación de gobernantes demagogos, que carecen por completo de valores como la honestidad, la transparencia o la ética, aunado a la ausencia de un sistema efectivo de pesos, contrapesos y rendición de cuentas. Esa nefasta combinación ha dado pie a inéditas redes de corrupción que invaden y corroen impunemente las estructuras de autoridad o que falsamente y disfrazadas en un discurso ético y moralista, dañan profundamente al erario público y violentan el estado de derecho, cometiendo las peores prácticas administrativas y delinquiendo, justificados en una supuesta justicia redistributiva que solo beneficia a sus promotores.
- Un gobierno autoritario que persigue a sus opositores; que utiliza los recursos de la inteligencia para espiar a activistas y defensores de los derechos humanos; que no sabe convivir en la pluralidad democrática; y que ha violado sistemáticamente las

garantías de libertad de expresión y seguridad, lo que impide el ejercicio de un periodismo crítico y sin miedo.

- Una pobreza y desigualdad que impiden a millones de mexicanos –casi la mitad del total de la población— acceder a una vida digna. Somos testigos de cómo en los dos últimos años, mientras crecen los recursos presupuestales destinados a los programas sociales, éstos empero, no logran revertir la tendencia empobrecedora y no han logrado reflejarse en un mejoramiento de las condiciones de vida de los mexicanos. La pobreza lastima a más de 50 millones de mexicanos, quienes no son capaces de mejorar sus condiciones y por ello, caen directo a una red clientelar y populista que preserva una visión electoral por encima de la más elemental sensibilidad ante el sufrimiento de millones de compatriotas.
- La mayor violencia e inseguridad de la historia reciente de nuestro país, la cual lastima a comunidades enteras y nos coloca frente a la ausencia de un Gobierno que se autodenomina **“Cuarta Transformación”** que ha sido incapaz de garantizar la seguridad de las personas en multitud de localidades. Frente a este escandaloso deterioro de nuestra vida política y frente a los dramáticos desequilibrios económicos y sociales que atentan contra el bien común, son necesarias medidas drásticas que transformen democráticamente las actuales estructuras sociales, económicas y políticas de nuestro país. México reclama un cambio de manera urgente. Las grandes debilidades institucionales que hoy refleja el Estado mexicano requieren de una transformación de fondo y a fondo, para frenar el deterioro de la vida nacional y atender los reclamos ciudadanos.
- El agotamiento institucional que vive nuestro país es una realidad. Sin embargo, la renovación de las instituciones en el país y, particularmente en el estado de San Luis Potosí, es la única opción viable para frenar la depredación insaciable de algunos cuantos, fomentar el quebranto y la desaparición del estado de derecho, como lo han venido haciendo los gobiernos federal y estatal, mediante acciones que solo alientan la impunidad, la corrupción y los privilegios de unos cuantos a costa de excluir a las mayorías. El actual régimen, ensimismado en el autoritarismo, excluye a la ciudadanía organizada y a sus agendas de la toma de decisiones y de las acciones de gobierno, provocando repetidas crisis multidimensionales: sociales, políticas, de salubridad y de legitimidad, económicas, de seguridad, pero sobre todo una gran crisis política.

La transición democrática de México continúa trunca y el país enfrenta riesgos de regresión autoritaria, derivado de la carencia de valores democráticos como la transparencia y la ausencia de un sistema de pesos, contrapesos y rendición de cuentas. Hoy el Estado muestra grandes debilidades y un importante déficit de capacidad en su actuar frente a los retos que se han presentado. Esos vacíos han dado pie a redes de corrupción que invaden las estructuras de autoridad y han construido un presidencialismo autoritario, sin frenos y reacio al pluralismo, donde el poder ciudadano ha sido secuestrado, lo que ha generado una polarización política y con ella, la pérdida de credibilidad y confianza ciudadana en las instituciones y en los gobernantes.

Cambiar este estado de cosas requiere que los partidos con vocación democrática, a partir de nuestras convicciones ideológicas, planteemos una agenda de trabajo que parta de la premisa sustancial de colocar a las personas en el centro de las decisiones. Es indispensable transitar hacia la obligación de quien ejerce el poder público, debe guiarse por el principio de que la ciudadanía manda y de que nadie, por poderoso que sea, puede estar por encima de la ley. No nos podemos conformar con un simple cambio en las élites y las oligarquías gobernantes. Es apremiante que la participación solidaria de la ciudadanía transforme de fondo la realidad actual de estado y derrote las estructuras anquilosadas que han impedido una auténtica vida democrática.

En el PRI, no vemos el futuro de San Luis Potosí con resignación ni estamos dispuestos a renunciar a nuestra responsabilidad de participar en la construcción de alternativas para la ciudadanía. Partimos de cuatro premisas básicas: ni la corrupción es cultural, ni la desigualdad es natural, ni la violencia es inevitable, ni la salud un beneficio de clase.

Para nosotros la función del gobierno no es administrar la crisis y regentar la pobreza con fines electorales. No apostamos por el mero cambio de partido en el poder, ni de personas en los cargos. Estamos empeñados en la construcción un nuevo régimen, diferente y mejor a lo actualmente existente.

Nuestra prioridad es erradicar la impunidad, crear condiciones para que a los honestos les vaya bien, a los corruptos mal y para que todas las personas tengamos una vida digna y con plena seguridad jurídica, personal y patrimonial. Queremos transformar a San Luis Potosí, en un estado en el que todos y todas podamos gozar de nuestro derecho al bienestar, la libertad, la salud, a un empleo digno, al desarrollo económico y la seguridad en un marco democrático.

Un México en el que se garantice el Estado de Derecho y jamás sea vulnerado por el mero capricho de una sola persona o grupos de poder. Un país en donde la corrupción y la impunidad no tengan cabida. Un México en el que el gobierno esté verdaderamente al servicio de la sociedad. Un nuevo régimen caracterizado por un sistema político incluyente, comprometido con garantizar las libertades, que promueva el bienestar social y el desarrollo de todas y todos los potosinos.

En el Partido Revolucionario Institucional estamos convencidos de que la solución a la situación antes descrita, no puede venir de los mismos que la han generado, pero tampoco de quienes piensan que la acción providencial de un Mesías sea suficiente para la necesaria transformación. Las soluciones tienen que venir desde la sociedad y a través de las organizaciones ciudadanas y los partidos que estén dispuestos a dejar de lado sus diferencias para anteponer las coincidencias ante el escenario de urgencia que vive nuestro país.

Estamos convencidos de que la sociedad organizada es fundamental para enfrentar al poder omnímodo del Estado autoritario. Las luchas sociales han sido fundamentales en la

democracia de nuestro país. Y en estos años hemos sido testigos de la movilización ciudadana a favor de grandes causas como la lucha contra la corrupción y la impunidad y la exigencia de que los gobiernos garanticen y respeten los derechos humanos. Durante décadas, las y los ciudadanos, grupos y movimientos han luchado por un cambio de régimen que permitiera a México vivir una auténtica democracia, lamentablemente esa lucha no ha terminado.

Nuestro Partido ha sido testigo y protagonista de la transformación del México Moderno. Estamos convencidos de la importancia que reviste fortalecer la democratización del país y sus instituciones.

Hoy el Partido Revolucionario Institucional se ha propuesto aglutinar el legado de todas las expresiones históricas que se han fijado como objetivo, la construcción de una sociedad más democrática. No pretendemos mimetizarnos, ni renunciar a nuestra historia y principios, pero sí estamos dispuestos, ante la situación de urgencia que vive el país, a poner por delante aquello que una a todas las expresiones democráticas.

Cambiar este régimen requiere poner a las personas en el centro de las decisiones y de las políticas públicas, para transformar el significado del acto de gobernar, para que los gobernantes ejerzan el poder público, a partir de la máxima democrática de que las y los ciudadanos mandan. Por ello, asumimos el compromiso de impulsar, desde el poder legislativo y los gobiernos Municipales, la agenda de transformación que hoy ponemos a disposición de la ciudadanía.

Nos anima un proyecto de transformación de largo plazo, en el que el interés general y la justicia social estén por encima de cualquier interés particular y por encima de las diferencias del mosaico social. Nuestro compromiso es con las legítimas demandas ciudadanas de transformación de la vida pública y de la realidad nacional, una plataforma para las personas.

El Partido Revolucionario Institucional propone retomar, impulsar y concretar la transformación democrática, a fin de lograr un piso de bienestar que genere condiciones de justicia, un techo de legalidad que ponga un alto a la impunidad y cuatro paredes de armonía social que nos permitan pasar del régimen autoritario en construcción a un México incluyente, estable y en paz.

Hoy en México y especialmente en el estado de San Luis Potosí requerimos:

- La conformación y consolidación de un nuevo régimen sustentado en un verdadero Estado de Derecho, con una división de poderes efectiva, un nuevo federalismo que involucre realmente a las entidades federativas y a los municipios en la responsabilidad de lo público, que respete las soberanías estatales y que no intervenga con fines electorales por medio de un centralismo absoluto, cuya base sea la participación ciudadana, la transparencia, la rendición de cuentas y el ejercicio pleno de las libertades en igualdad de condiciones.

- Un sistema político con mecanismos que incentiven el buen desempeño, sancione la falta de resultados y garantice la gobernabilidad y gobernanza democrática en nuestro país, desechando la cultura, prácticas y estructuras del centralismo y el autoritarismo.
- Un sistema económico en crecimiento e incluyente que combata la desigualdad, que genere igualdad de oportunidades y distribuya los beneficios del crecimiento con justicia, equidad y respetando el medio ambiente.
- Transitar a una sociedad en la que se generen las oportunidades y condiciones para ejercer sus derechos en la que se incentive la movilidad social, se respete la eminente dignidad humana y la libertad personal.
- Un sistema educativo que eduque durante y para toda la vida, comprenda la dimensión integral de la persona, en inteligencia, afectividad, libertad y sociabilidad, y nos prepare para la convivencia, la participación y la competencia mundial.
- Instituciones de seguridad y procuración de justicia honestas, confiables y eficaces para poner fin al caos, la violencia y la inseguridad. El nuevo sistema político debe construirse, no en función de partidos ni de candidaturas, sino a partir de un proyecto de Estado que establezca las nuevas reglas de convivencia social, las instituciones que se necesitarán para hacerlas valer y los mecanismos para asegurar que tendrán las facultades y condiciones para lograrlo, a partir del principio de la subsidiariedad y de la corresponsabilidad entre gobierno y sociedad.

Nuestra plataforma política y electoral incorpora propuestas de la ciudadanía y de diversas organizaciones de la sociedad civil, recabadas a través de diversos foros, encuentros y documentos. Es pues, una plataforma enriquecida por la sociedad. En este sentido, impulsaremos un nuevo modelo de Estado teniendo como ejes:

- 1) La transformación del actual régimen político y el impulso a la democracia ciudadana.
- 2) El combate total y frontal a la corrupción y a la impunidad.
- 3) La pacificación del estado, con seguridad, respeto a los derechos humanos y justicia para todas las personas.
- 4) La necesidad de un desarrollo económico con crecimiento, inclusión social y sostenibilidad.
- 5) El fortalecimiento de la posición de San Luis Potosí en México y en el mundo.
- 6) El fortalecimiento del sector salud en el estado.
- 7) La libertad de pensamiento y de libertad de expresión.

## **I. La transformación del actual régimen político y el impulso a la democracia ciudadana.**

Los últimos años del siglo XX significaron para México toda una serie de cambios en los más distintos ámbitos de la vida política y social. Con las reformas electorales se avanzó en la democracia y en especial en la competitividad entre los partidos por el voto de la ciudadanía en la representatividad, la alternancia en el poder presidencial, y en la pluralidad política.

Pero en el ejercicio del poder se mantuvo la concentración del poder, el presidencialismo que atestiguamos en un claro ejemplo de ello, el autoritarismo y el centralismo son una grave amenaza para el futuro del país, por lo que hoy más que nunca los contrapesos políticos, pero sobre todo institucionales son más necesarios que nunca.

En el año 2000 se dio la transición en el poder en México, con lo que se avanzó significativamente en la ruta de la consolidación de la democracia. Empero, actualmente la sociedad no encuentra en la democracia su bienestar, al contrario, ha sufrido una profunda regresión en sus condiciones de vida, sumergida además en un sistema de violencia, corrupción e impunidad.

Esto ha desembocado en una creciente desafección política de parte de la ciudadanía en general y en particular de las y los jóvenes, así como una creciente distancia entre la clase gobernante y la sociedad en su conjunto. Esta distancia, obliga a los partidos y al gobierno a cambiar la forma de gobernar, a pasar de un régimen que busque mecanismos para hacer valer sus decisiones, a uno en el que las decisiones estén sustentadas en el bienestar colectivo, orientadas por la democracia, la rendición de cuentas, la participación ciudadana, las libertades políticas, el desarrollo social y la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres.

El actual régimen político mexicano está rebasado y es por completo inviable para las actuales necesidades y retos del país. A pesar de los enormes avances democráticos de los últimos veinte años, producto del impulso ciudadano y de los partidos políticos con origen y vocación democráticos, el México de hoy es uno de concentración del poder en manos de una sola persona y que responde a intereses detentadores de monopolios económicos y promotores de la corrupción.

Esta visión de dismantelar las instituciones, nos ha acercado peligrosamente a las peores experiencias autoritarias de otros países, antes que proyectarnos con visión democrática hacia el futuro. La democracia mexicana se encuentra en una encrucijada entre más de lo mismo, el regreso al pasado o el tránsito hacia un régimen verdaderamente democrático. Los peores lastres para el país como la corrupción, la pobreza, la inseguridad y la violencia, así como el enorme déficit en la construcción de un Estado de Derecho no se lograrán superar con el actual sistema político presidencialista y metaconstitucional.

México requiere de acciones que favorezcan las decisiones plurales por encima de las de imposición. Para ello buscamos un cambio de régimen, que vaya más allá de personajes y partidos, para sustituir el actual modelo por uno en el que la ciudadanía tenga mayor

capacidad para influir en las decisiones del país, comenzando por aquellas que inciden en la calidad de vida de la gente.

Un gobierno de la ciudadanía y no uno del Presidente de la República o de un super delegado es el objetivo del Partido Revolucionario Institucional. Impulsaremos un nuevo régimen que parta del establecimiento de un gobierno que permita los consensos y estabilidad necesarios para la eficaz gobernanza.

El gobierno emprendido por el Ejecutivo estatal, se encuentra políticamente agotado, en tan sólo dos años hizo evidente que en la demagogia y el populismo, ninguna sociedad puede satisfacer sus requerimientos mínimos y sus proyectos insignia no serán suficientes para afrontar los retos del futuro, se requiere un nuevo esquema que permita el avance nacional a través de la construcción de una ciudadanía fuerte, crítica, informada y participativa, contrario a lo que fomenta el actual régimen.

La participación ciudadana es la vía para el cambio de régimen político en México, cuya base serán las personas opinando, incidiendo y decidiendo. Para ello es indispensable establecer una amplia agenda digital transversal que amplíe y facilite el ejercicio del derecho a la información de toda la ciudadanía y la comunicación digital entre gobernantes y gobernados, facilitando y transparentando todos los trámites que hoy se prestan a un manejo opaco y corrupto.

Hay que empoderar a la sociedad y abrir mayores espacios para la participación ciudadana en la vida pública, tanto en la toma de decisiones como en la vigilancia del cumplimiento de las metas de gobierno. Por ello, la Coalición plantea como uno de sus ejes fundamentales apuntalar nuestra democracia mediante el acotamiento del presidencialismo imperante, una distribución efectiva del poder y mejores mecanismos de control entre los 58 municipios del estado.

Nuestra propuesta es ampliar y robustecer los mecanismos de democracia participativa como la consulta popular, el plebiscito, el referéndum, el presupuesto participativo, gobierno abierto, parlamento abierto y la ratificación y revocación de mandato. Por ello, el Partido Revolucionario Institucional se propone:

I.1. Fortalecimiento del Estado de Derecho.

I.2. Consolidar una sociedad de derechos en la que se incentive la movilidad social, se respete la dignidad humana y la libertad personal para el pleno desarrollo de las personas.

I.3. Incluir como eje central de las políticas y programas de gobierno un enfoque transversal de igualdad sustantiva de género desde la perspectiva de los derechos humanos.

I.4. Fortalecer los pesos y contrapesos entre los Poderes del estado y los municipios, con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.

I.4.1. Promover reformas de ley que desmantelen el sistema autoritario, sustituyéndolo por uno que garantice la participación de la sociedad en los temas trascendentes para el país.



- I.4.2. Revisar y adecuar el régimen de distribución de competencias y responsabilidades entre el gobierno estatal y los ayuntamientos
- I.4.4. Garantizar la autonomía e independencia del Poder Judicial del estado y al mismo tiempo impulsar en su interior, la transparencia y rendición de cuentas sobre su desempeño y renovación, y en lo exterior, el combate a la corrupción y a la impunidad
- I.5. Fortalecer el sistema democrático.
  - I.5.1. Fomentar que la participación ciudadana sea elemento fundamental en la toma de decisiones y la rendición de cuentas, a través de mecanismos como la iniciativa ciudadana, plebiscito, referéndum, ratificación, revocación de mandato, planeación y presupuestos participativos con transparencia y rendición de cuentas.
  - I.5.2. Establecer debates públicos permanentes entre los partidos políticos, los gobernantes y la ciudadanía, con formatos flexibles, para contrastar las ideas y las decisiones sobre políticas públicas, y volver tales debates obligatorios, sin limitación alguna.
  - I.5.3. Eliminar toda forma de violencia política contra la mujer y ampliar los espacios de representación y participación de las mujeres en la vida pública, impulsando que todo órgano colegiado se integre de manera paritaria.
  - I.5.4. Fortalecer el marco de operación de las organizaciones sociales.
- I.6. Conformar un gabinete de composición plural e integrado con criterios de equidad de género, capacidad, méritos, profesionalismo y honestidad
- I.7. Fortalecer las funciones de control y fiscalización del gobierno.
  - I.7.1. Presentación de informes periódicos de las Secretarías del gobierno estatal.
- I.8. Establecer e impulsar buenas prácticas de buen gobierno en todos los niveles de la administración pública estatal.
  - I.8.1. Establecer estándares claros de buen gobierno que incluyan la medición de sus políticas y acciones a través de indicadores y metas que esté obligado a cumplir.
  - I.8.2. Intensificar el empleo y desarrollo de las nuevas tecnologías de la información para los trámites de gobierno (gobierno electrónico).
  - I.8.3. Fortalecer el Servicio Profesional de Carrera.
  - I.8.4. Privilegiar el mérito, la idoneidad y el esfuerzo como los elementos sustantivos para ocupar cargos públicos.
  - I.8.5. Desarrollar un modelo de simplificación administrativa para que la ciudadanía acceda a los servicios de gobierno de una manera más sencilla y con mayor transparencia.
- I.9. Revisar la cantidad y calidad del gasto público bajo los principios de la austeridad y eficiencia.
- I.10. Garantizar la libertad religiosa y el pleno respeto y tolerancia de las creencias de cada uno de los mexicanos, en el marco de la vigencia del Estado laico y de la Constitución.

## **II. El combate total y frontal a la corrupción y a la impunidad.**

La corrupción es uno de los principales flagelos del México contemporáneo. Lo mismo ocurre con la deformación jurídica que le da origen: la impunidad. Con frecuencia la ley no se aplica, se aplica selectivamente, o simula que se aplica, resultando en más y más corrupción.

La corrupción y la impunidad lastiman al país y ofenden a la sociedad, socavan la confianza ciudadana en las instituciones y el servicio público y minan el Estado de Derecho, propician inseguridad jurídica, se asocian con la violencia, frenan la capacidad de la economía para reactivarse, producen injusticia y constituyen graves atentados a la convivencia armónica.

Ninguna transformación positiva del país tendrá éxito si antes no se da la batalla de manera decidida contra ambos terribles fenómenos. La corrupción y la impunidad se han convertido en una puerta abierta para que las acciones delictivas proliferen, y la ciudadanía percibe que en México hay un clima generalizado de incapacidad e impunidad en la persecución y castigo de los criminales. Urgen acciones para recuperar la paz y tranquilidad de las y los mexicanos.

El Partido Revolucionario Institucional tiene claro que la lucha contra la corrupción no puede darse desconociendo el estado de derecho, un gobierno que busca terminar con un mal, por medio de mecanismos ilegales como la adjudicación directa de obra y contratos públicos o simulando consultas populares arregladas y carentes de toda legalidad, no es el camino para detenerla, sino que por el contrario, la incentiva.

Tenemos claro que la corrupción y la impunidad no son fenómenos culturales, como se ha afirmado desde el poder con profunda frivolidad e incluso complicidad, sino de verdaderas afrentas que deben ser derrotadas con visión de Estado, inteligencia y voluntad política. Tampoco es algo a lo que la sociedad mexicana esté condenada indefectiblemente. Estamos de acuerdo que, si bien esta lucha la debe encabezar el Estado, por ser quien cuenta con los recursos para ello, es la sociedad quien debe de determinar el rumbo y las acciones a seguir.

Tenemos claro también que ninguna propuesta efectiva de combate a la corrupción puede diseñarse sin el cumplimiento irrestricto de la ley, y la aplicación de una política de cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad, auxiliado de un sistema anticorrupción autónomo y con total independencia para combatir este flagelo.

El buen gobierno debe ser transparente y rendir cuentas. Asumimos el compromiso con el combate a la corrupción y la impunidad, con un esquema de fiscalización en el que la ciudadanía sea parte de los procesos de transparencia, rendición de cuentas, para romper con el abuso de poder y la impunidad en el país. Por ello, una de nuestras propuestas en transparencia y rendición de cuentas es la obligación real de todos los servidores públicos de presentar sus declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses.

Buscaremos que los servidores públicos corruptos sean inhabilitados de por vida para ocupar cualquier puesto público y la devolución de los bienes apropiados, poniendo el ejemplo tanto en las instancias más altas del poder público; no más hermanos juntando apoyos para su partido-, como en los funcionarios de menor nivel –no más mordidas.

En la Coalición nos proponemos:

II.1. Establecer una campaña en favor del establecimiento de un genuino Estado de Derecho y de combate a la impunidad, como mecanismos para favorecer nuestra democracia, la seguridad, inversión, creación de empleos, calidad de vida y, el turismo, entre otros.

II.2. Fortalecer y ampliar los programas y mecanismos de cooperación en materia de combate a la corrupción.

II.2.1. Revisar integralmente el sistema de responsabilidades y sanciones de los servidores públicos y de los agentes privados que interactúan con ellos.

II.2.2. Prohibir el uso de dinero en efectivo para cualquier transacción gubernamental, en todos aquellos lugares que la infraestructura lo permita.

II.2.3. Hacer obligatoria la presentación y publicación de las declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscal para todas aquellas personas que ejerzan el servicio público.

II.2.4. Instituir la "muerte civil" a servidores públicos y empresas privadas que hayan sido condenadas por actos de corrupción, esto es, inhabilitarlos para desempeñar cargos públicos o para participar en la contratación de compras y de obras gubernamentales, mediante un Registro Público de Funcionarios y Empresarios Sancionados e Inhabilitados.

II.2.5. Eliminar la prescripción de los delitos como enriquecimiento ilícito, peculado, lavado de dinero y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

II.2.6. Transparentar la actuación de los juzgados, de la administración y procuración de justicia y del poder judicial en general.

II.2.7. Transparentar el cabildeo en el congreso.

II.2.8. Impulsar una Comisión Ciudadana para la Investigación de Actos de Corrupción, que ayude a poner al descubierto la verdad sobre los casos notables, pasados y presentes, de actos de corrupción y exponer públicamente a los corruptos, a fin de que se inicie el proceso judicial correspondiente.

II.3. Fortalecer la transparencia de la acción pública.

II.4.1. Establecer Observatorios Ciudadanos con capacidad de supervisar y fiscalizar en tiempo real la legalidad, transparencia y rendición de cuentas de los contratos de adquisiciones y obras públicas celebrados por el gobierno.

II.4.2. Simplificar los mecanismos de acceso de las personas a la información pública gubernamental, y modificar el marco legal, a efecto de minimizar la posibilidad de que por opacidad, los entes o funcionarios públicos declaren reservada información pública, o peor aún, la declaren como inexistente.

II.4.3. Identificar los trámites y procesos que con mayor frecuencia se prestan a la opacidad y a la discrecionalidad y simplificarlos, sujetándolos a controles tecnológicos y de digitalización.

### **III. La pacificación del país, con seguridad, respeto a los derechos humanos y justicia para todas las personas**

Los últimos años representan sin duda los más violentos de nuestra historia contemporánea. El Estado mexicano no está cumpliendo con su función de brindar seguridad y protección a las personas y sus bienes. Desde hace varios años grandes porciones de nuestro territorio se encuentran bajo el control de grupos ajenos al Estado.

La ciudadanía vive temerosa por la escalada de violencia y crímenes que atentan contra la paz y seguridad en su entorno. La violencia es un problema nacional y sistémico, cuyas causas son multifactoriales, e incluyen la falta de oportunidades, y un sistema económico que produce más pobreza en vez de combatirla.

La violencia, la delincuencia y la impunidad minan la confianza de la población en las capacidades del Estado, en los órganos de procuración e impartición de justicia y en las corporaciones policiales. El sistema de justicia mexicano está debilitado y corrompido, y es ineficiente e ineficaz. Requiere de un rediseño que incluya un replanteamiento desde su concepción.

El ministerio público ha dejado de ser garante de un sistema penal, los jueces administran la justicia, pero no la imparten, y los centros de reclusión no buscan reintegrar a los delincuentes a la sociedad, sino sólo mantenerlos alejados de ella, con la amenaza permanente de que, al regresar, serán nuevamente un peligro para su comunidad.

En el Partido Revolucionario Institucional somos conscientes de que a pesar de los enormes esfuerzos desplegados en la última década en materia de seguridad y combate a la violencia en todo el país, tanto en el ámbito jurídico, como en el de la acción de los gobiernos, no se han obtenido los resultados esperados, y la sociedad vive en un permanente estado de indefensión frente a los delincuentes y las mafias del crimen organizado, que crecen sin parar en número y capacidad de daño.

Creemos que es momento de cambiar paradigmas en esta materia, para que el Estado restituya la más importante de sus obligaciones, que es la de brindar seguridad a las personas, con un enfoque que priorice la prevención de los fenómenos de violencia y delincuencia; redefiniendo actuación, para atender de forma prioritaria los delitos que más lastiman a la sociedad, como son el robo con violencia, la extorsión, el secuestro, los homicidios y los feminicidios.

Nuestra política de seguridad se enfocará en proteger a las personas, garantizar los derechos humanos y la convivencia social en un marco democrático donde se fortalezca la participación ciudadana, tanto en el diseño de las políticas como en su seguimiento y evaluación.

La lucha contra el delito también pasa por la educación y la formación cívica en valores. Por eso instrumentaremos una campaña en favor de la legalidad, la convivencia cívica y los derechos humanos. La nueva estrategia de seguridad ciudadana de la Coalición privilegiará la investigación científica, la desarticulación de las bases económicas y financieras de las redes delincuenciales y sus vínculos con las otras más; la prevención del delito, el respeto total de las leyes, y el castigo ejemplar a los delincuentes. Haremos énfasis en la profesionalización y dignificación de la carrera policial como parte fundamental de la estrategia, no desarticulemos la fuerza de seguridad civil ni privilegiaremos la militarización del estado como se ha venido desarrollando a nivel nacional.

El combate a las organizaciones de delincuencia organizada incluirá una nueva política de drogas de reducción de daños y riesgos, acompañada con un mayor uso de la inteligencia para la desarticulación de dichas organizaciones y esquemas de cooperación y coordinación nacional e internacional bajo el principio de responsabilidad compartida.

En el Partido Revolucionario Institucional nos proponemos:

III.1. Diseñar e implementar una política de seguridad humana de carácter integral, para que todos los potosinos y potosinas gocen de su derecho inalienable a vivir en un entorno seguro y libre de violencia, atendiendo las causas estructurales de la violencia y la delincuencia.

III.1.1. Hacer el cumplimiento del Estado de Derecho un eje fundamental de la seguridad ciudadana.

III.1.2. Preservar el Sistema estatal de Seguridad Pública, como una instancia civil y ciudadana.

III.1.3. Consolidar un mecanismo de coordinación interinstitucional entre las instancias encargadas de la seguridad.

III.1.4. Concentrar los esfuerzos en combatir los delitos que más lastiman a la sociedad, comenzando con el homicidio, robo con violencia, los feminicidios, el secuestro y la extorsión.

III.1.5. Combatir los abusos y violaciones a derechos humanos tales como: la trata de personas, la desaparición forzada, la desaparición, la afectación de derechos en contextos de movilidad humana, las ejecuciones extrajudiciales y todas aquellas privaciones de la libertad contrarias a la ley.

III.1.6. Establecer a nivel estatal programas para prevenir y reducir la violencia en todas sus dimensiones, a través de políticas y acciones de prevención de la violencia y el delito, la recuperación de espacios públicos y el fomento a la cultura de la legalidad.

III.1.7. Implementar programas de inclusión y atención para niños, niñas, adolescentes y jóvenes que viven en contextos y entornos de violencia.

III.1.8. Recuperar espacios públicos creando entornos seguros de convivencia.

III.1.9. Reconsiderar las prioridades del gasto en seguridad dando prioridad al gasto estratégico tareas de investigación, inteligencia y procuración y administración de justicia.

III.1.10. Garantizar el acceso a la procuración e impartición de justicia con perspectiva de

género con la finalidad de hacer realidad el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

III.2. Implementar una política de seguridad ciudadana que garantice el pleno respeto de los derechos humanos, proteja a las víctimas y se sustente en la participación ciudadana.

III.2.1. Fortalecer la participación de la sociedad civil en el Sistema Estatal de Seguridad Pública, para la formulación, implementación, seguimiento y evaluación de las políticas de seguridad; así como en la supervisión del sistema penitenciario local.

III.2.2. Fomentar y fortalecer la participación de la ciudadanía en el diseño, seguimiento y evaluación de las políticas de seguridad de sus comunidades.

III.2.3. Fortalecer los mecanismos de seguimiento y atención de las recomendaciones de las Comisiones de Derechos Humanos Nacional y del Estado.

III.2.4. Proteger la integridad de las víctimas de la violencia y la delincuencia.

III.2.5. Garantizar el debido proceso y la erradicación de la tortura o la coerción para obtener declaraciones de los acusados.

III.2.6. Combatir la trata de personas en sus diversas modalidades y establecer programas específicos de atención a las víctimas de estos delitos, proporcionándoles el apoyo necesario para su reinserción social.

III.2.7. Garantizar a las mujeres el derecho de acceso a la justicia mediante el diseño e implementación de protocolos de actuación por parte de las autoridades de seguridad pública, así como de procuración y administración de justicia, para erradicar el grave flagelo de los feminicidios y de la violencia contra las mujeres. Los diversos agentes del Estado relacionados con esta problemática recibirán la capacitación adecuada para la correcta e inmediata implementación de dichos protocolos.

III.3. Fortalecer a las instituciones policiales para enfrentar al delito y recuperar la confianza de la sociedad.

III.3.1. Definir e instrumentar un modelo de carrera policial, con los recursos financieros y humanos para su capacitación, equipamiento e infraestructura.

III.3.2. Fortalecer las capacidades policiales mediante la capacitación permanente y el uso de tecnología e inteligencia, como elementos fundamentales para abatir los delitos.

III.3.3. Mejorar los mecanismos de colaboración y coordinación de los cuerpos policiales de los tres órdenes de gobierno, para lograr que éstos sean eficientes y atiendan la demanda ciudadana de combate a los delitos.

III.3.4. Fomentar el respeto y la confianza en las policías, a través del proceso de certificación, evaluación y controles de confianza abierto al escrutinio y a la participación de la sociedad civil.

III.3.5. Dignificar y enaltecer a los miembros de las corporaciones policiales, a través de salarios dignos, prestaciones sociales y protección para el personal de las instituciones policiales y sus familias.

III.3.6. Fortalecer a las policías municipales, de proximidad y comunitarias, para el desempeño de las tareas de seguridad ciudadana como la contención de los delitos del fuero común y tareas para preservar la paz pública y la convivencia social.

III.3.7. Mejorar los mecanismos de colaboración y coordinación de los cuerpos policiales de los municipios con la fuerza estatal, para lograr que éstos sean eficientes y atiendan la demanda ciudadana de combate a los delitos.

III.4. Implementar, con relación al consumo y tráfico de drogas, una política integral enfocada en la reducción de daños y riesgos y en la desarticulación de las organizaciones de delincuencia organizada.

III.4.1. Fortalecer las capacidades técnicas, de equipamiento y de operación estratégica de las policías para hacer frente a la delincuencia y mejorar la coordinación entre los distintos órganos de gobierno encargados de la seguridad.

III.4.2. Reformular la estrategia contra las organizaciones delincuenciales, privilegiando el uso de la información de inteligencia para la desarticulación de los grupos delictivos y el combate al lavado de dinero.

III.4.3. Identificar y desarticular las redes de corrupción entre políticos, funcionarios públicos, empresarios y organizaciones criminales.

III.4.4. Impulsar un amplio programa nacional de prevención y reducción de riesgos en torno al consumo de estupefacientes y otras sustancias psicotrópicas, así como garantizar la calidad de los servicios públicos en materia de prevención, atención, rehabilitación y reducción de daños.

III.4.5. Profesionalizar y fortalecer a los elementos de los cuerpos policiales para que en todo el territorio estatal reasuman y cumplan sus funciones de seguridad pública.

III.5. Combatir las malas prácticas, la impunidad, y la corrupción en el sistema de impartición y procuración de justicia.

III.5.1. Fortalecer las capacidades de los ministerios públicos para la investigación y consignación de los delincuentes.

III.5.2. Garantizar la independencia política de la Fiscalía estatal y los titulares de las fiscalías especializadas en anticorrupción, delitos electorales y derechos humanos, incorporando criterios de selección para recuperar la legitimidad frente a la ciudadanía y estén libres de prácticas de control político.

III.5.3. Revisar a profundidad la forma en que operan los servicios técnico forenses.

III.6. Utilizar herramientas tecnológicas para evitar la comisión de delitos desde las cárceles. Establecer la obligación nacional del bloqueo de señales de teléfono celular e internet al interior y en las periferias de tales centros.

III.7. Impulsar la profesionalización, capacitación del personal de los centros penitenciarios de reinserción y establecer controles de confianza y evaluación permanente. III.7.4.

Establecer medidas eficaces contra la corrupción, el trato discriminatorio y/o diferenciado de las personas en reclusión, las violaciones a sus derechos humanos, el consumo y el tráfico de drogas, la inducción a la comisión de delitos al interior de los centros de reclusión.

III.7.1. Hacer obligatorios el trabajo y la educación penitenciarias e implementar mecanismos de seguimiento y evaluación de los programas de reinserción social.

#### **IV. La necesidad de un desarrollo económico con crecimiento, inclusión social y sostenibilidad**

Los esfuerzos del Estado mexicano para mejorar las condiciones económicas de la gran mayoría de la población han fracasado. No han conseguido organizar una economía que simultáneamente produzca riqueza y la distribuya con equidad. México requiere una política

de crecimiento económico sostenido que permita erradicar la pobreza y fortalecer a las clases medias, con altos niveles de empleos dignos, y una recuperación del poder adquisitivo del salario.

Para el Partido Revolucionario Institucional es una prioridad generar crecimiento económico, abatir la pobreza, el hambre y proveer de oportunidades a las familias, a las comunidades y a las personas para que se desarrollen plenamente. Sostenemos que cualquier acción promovida por el Estado en aras de tales propósitos, debe hacerse sin comprometer el bienestar de las generaciones futuras y sin menoscabar la dignidad de las personas en el presente y mucho menos pensando con fines electorales.

Tenemos claro que la política social de los últimos años a favor de los más desfavorecidos solamente ha administrado la pobreza, pero no la ha erradicado, y ni siquiera disminuido de manera contundente. Hoy existe prácticamente el mismo número de pobres con respecto a la población que en 1992: poco más del 50% del total de la población, conforme a cifras oficiales.

Especial atención merece la feminización de la pobreza, pues las cifras revelan que son las mujeres –sobre todo aquellas de medios rurales– quienes enfrentan mayores condiciones de precariedad y pobreza. Por esa razón impulsaremos una reforma estructural a la política de combate a la pobreza en el estado, hoy desperdigada, asistencialista, electorera, clientelar y poco efectiva en sus fines.

En la Coalición daremos prioridad a la protección del ingreso de las familias mexicanas. Por esa razón nos comprometemos a instrumentar una política fiscal responsable, evaluar y rectificar la política recaudatoria que tanto daño ha hecho a la sociedad, inhibiendo su desarrollo, empobreciéndola y comprometiendo el futuro y el nivel de vida de las familias.

Nos comprometemos por ello a revisar tales acciones y a emprender un uso responsable del dinero de los contribuyentes. Impulsaremos una economía social de mercado, a través de una estrategia de desarrollo que garantice el crecimiento de la economía a largo plazo y fomente la creación de empleos dignos.

Abandonaremos las políticas asistencialistas, y electoreras que propician el clientelismo y que no sólo no resuelven la pobreza, sino que, en conjunto, contribuyen a profundizarla. Nos proponemos una estrategia de crecimiento económico más dinámica, en la que el sector público junto con los empresarios y el sector social, propicien el fortalecimiento del mercado interno y el desarrollo de las regiones más rezagadas del estado, que estimule el desarrollo tecnológico y la innovación, y procure el tránsito hacia una economía del conocimiento.

Implantaremos una política de desarrollo de infraestructura que detone la inversión, y fomentaremos al sector agropecuario y agroindustrial. Impulsaremos, además, un cambio en la base energética, impulsando las energías limpias y amigables con el medio ambiente.



Las políticas sociales de la Coalición pondrán énfasis en la importancia del desarrollo de las capacidades de las personas. Su efectividad deberá medirse a partir de la ampliación de oportunidades para que las personas gocen de un nivel de vida digno. Proponemos un enfoque de derechos humanos, centrado en las personas, en el que de forma transversal se planteen los objetivos de crecimiento y desarrollo económicos, bienestar e inclusión social y cuidado del medio ambiente y los recursos naturales. En otras palabras, una política pública basada en el enfoque de desarrollo humano y en el desarrollo sostenible.

Para ello proponemos una educación de calidad en todos los niveles, el fortalecimiento de un sistema de salud integrado e incluyente, de acceso universal, y el derecho a una vivienda digna para todos los potosinos, iniciando con los sectores más vulnerables.

Para nosotros, el desarrollo social y la protección del medioambiente son interdependientes e inseparables. La política ambiental de México dejará de ser reactiva y establecerá una perspectiva de largo plazo a partir de los principios del desarrollo sostenible.

En la Coalición se propone el siguiente:

### **PROGRAMA DE GOBIERNO:**

I.1. Una economía para la inclusión y el bienestar.

I.1.2. Impulsar un modelo de desarrollo inspirado en los principios de la economía social de mercado orientada al crecimiento económico con equidad.

I.2. Establecer una política de Estado que combata la pobreza, la desigualdad y la marginación en todas sus dimensiones y manifestaciones.

I.2.1. Asegurar la igualdad salarial entre mujeres y hombres por trabajos iguales. Sancionar el requisito de la prueba de embarazo para acceder a un trabajo, así como el despido por la misma razón.

I.2.2 Fomentar programas de apoyo a las madres trabajadoras para facilitar que puedan continuar con su vida laboral, mientras sus hijos están bajo cuidado de personal capacitado en centro de desarrollo infantil.

I.2.3. Combatir el fenómeno de la feminización de la pobreza mediante políticas públicas y planes de gobierno tendientes a promover la participación de las mujeres en la vida económica del país, estableciendo programas de becas, de capacitación y créditos para emprender negocios, así como estímulos fiscales a empresas que tengan programas que colaboren con este propósito.

I.3. Establecer una estrategia de desarrollo que garantice un crecimiento sostenido de la economía y que fomente la creación de empleos dignos, a partir de la transformación de la estructura productiva de poco valor a una de alto valor agregado.

I.3.1. Fortalecer el mercado interno como palanca del desarrollo estatal, frente a los ciclos de la economía nacional.

I.3.2. fomentar la industria estatal, con una lógica de libre comercio e integración plena al mundo.

I.3.3. Implementar políticas de Estado que impulsen el incremento sostenido de la productividad y competitividad de la economía estatal.

I.3.4. Establecer una política de Estado para acelerar la industrialización del estado, con igualdad de oportunidades para todos los inversionistas privados, libre de cualquier favoritismo.

I.3.5. Poner en práctica acciones que permitan incrementar sustantivamente el ingreso de divisas para el estado a través del turismo.

I.3.6. Incentivar el desarrollo de la capacidad productiva y tecnificación progresiva de los sectores primarios de la economía, para incrementar la producción y mejorar la calidad de vida y el bienestar de sus trabajadoras y trabajadores.

I.3.7. Impulsar estrategias que estimulen a la planta productiva estatal hacia actividades con mayor valor agregado, para generar externalidades positivas y mayor competitividad a nivel nacional.

I.3.8. Fomentar la creación de empresas proveedoras de insumos intermedios y bienes de capital.

I.3.9. Promover el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas e industrias, procurando que en ellas se creen empleos dignos, buscando encadenarlas con la industria manufacturera de exportación y la transferencia de capacidades tecnológicas y organizacionales.

I.3.10. Impulsar el desarrollo de la economía social, colaborativa y solidaria.

I.3.11. Fomentar la circulación de recursos suficientes para dar viabilidad económica a proyectos industriales y agroindustriales estratégicos detonadores del desarrollo de los principales sectores de la economía y las regiones.

I.3.12. Fomentar la integración de cadenas productivas para incrementar un mayor valor agregado.

I.3.13. Procurar la seguridad energética del estado, con certeza de abasto, calidad, precio y sostenibilidad, procurando una creciente industrialización y tecnificación del sector energético.

I.3.14. Impulsar el desarrollo e incorporación de energías limpias y renovables en la matriz energética del estado.

I.3.15. Impulsar el tránsito hacia una economía digital y del conocimiento.

I.4. Ejercer una auténtica planeación democrática de corto, mediano y largo plazos a través de un Consejo Económico y Social incluyente con participación del sector empresarial, laboral, académico y liderazgos sociales.

I.5. Establecer una política fiscal integral orientada al bienestar social de las familias y el desarrollo económico.

I.5.1. Diseñar un sistema fiscal promotor del desarrollo económico y social, que estimule la inversión, el ahorro interno y distribuya la riqueza de forma equitativa, que favorezca el ingreso de las familias mexicanas colocándolo como una prioridad por encima de los ingresos del gobierno, convirtiéndose en un verdadero instrumento del desarrollo nacional.

I.5.2. Replantear las políticas de gasto público para que se gaste mejor y de manera más racional, prestando servicios de mejor calidad y más oportunos; y se impulsen y promuevan el crecimiento económico equilibrado y el desarrollo social.

I.5.2.1. Establecer como criterio rector del gasto público el máximo beneficio para la ciudadanía.

I.5.2.2. Manejar las finanzas públicas de manera responsable, eficaz, eficiente y transparente, evitando duplicidades y estableciendo con claridad y justificación los rubros en los que será aplicado el gasto público.

I.5.2.3. Vigilar que el gasto público tenga un efecto de redistribución de la riqueza.

I.5.2.4. Reducir la participación del gasto corriente en el gasto total e incrementar el gasto de capital para el desarrollo de infraestructura.

I.5.2.5. Mejorar la distribución directa de lo recaudado entre los diferentes órganos de gobierno, con mecanismos adecuados de control, transparencia sobre el origen del ingreso y el destino de los gastos, y rendición de cuentas, manteniendo una coordinación fiscal efectiva y eficaz.

I.5.2.6. Erradicar los actos de corrupción en la asignación del gasto público, incluyendo la asignación directa de contratos de obra y adquisiciones públicas.

I.5.3. Establecer un sistema tributario eficaz, eficiente, progresivo, con una mayor base de recaudación fiscal, y con políticas de administración tributaria claras y simples.

I.5.3.1. Simplificar el sistema de recaudación tributaria.

I.5.3.2. Ampliar la base de contribuyentes, incorporando al régimen fiscal a los sectores informales de la economía.

I.5.3.3. Mejorar los mecanismos de control en la recaudación, combatiendo la evasión y elusión en el pago de impuestos, en particular por parte de los grandes contribuyentes.

I.5.3.4. Corresponsabilizar a los municipios de la recaudación tributaria.

I.5.4. Disminuir y transparentar el origen, contratación y pago o renegociación de la deuda pública. Establecer límites de endeudamiento por sector, dependencia y partida.

I.6.1 Implementar una estrategia de desarrollo estatal y regional que permita reducir la desigualdad en el estado, prestando especial atención a las regiones más, con la participación de actores locales

I.6.2. Desarrollar una estrategia integral de inclusión productiva.

I.6.3. Promover la vinculación entre las industrias y los centros de investigación e instituciones de educación superior.

I.6.4. Fortalecer las capacidades institucionales de los municipios para hacer funcional su participación en el desarrollo regional.

I.7. Desarrollo humano.

I.7.1. Redefinir la política de desarrollo social del estado, para que efectivamente contribuya a reducir en números absolutos la pobreza, la marginación y la desigualdad, y que mejore la vida de las familias; bajo criterios de subsidiariedad, garantizando el desarrollo humano.

I.7.2. Atacar las causas estructurales de la pobreza.

I.7.3. Transformar la política asistencialista, adoptando una perspectiva de derechos humanos que garantice la igualdad de oportunidades y de acceso a los bienes y servicios básicos para el desarrollo humano, como la salud, la educación, la alimentación, la vivienda y la cultura.

I.7.4. Procurar que toda la población tenga acceso a una alimentación saludable, con una ingesta calórica y nutricional diaria satisfactoria.

I.7.5. Desarrollar un sistema de educación pública, laica y gratuita, de calidad mundial.

I.7.5.1. Colocar a las y los estudiantes en el centro de toda política educativa.

I.7.5.1.1. Garantizar que la educación obligatoria deberá ser accesible para todas y todos los habitantes del estado, favoreciendo una localización geográfica razonable y el uso de tecnologías de la información y la comunicación que faciliten el acceso al sistema educativo.

I.7.5.1.2. Se establecerán acciones afirmativas destinadas a prevenir o compensar situaciones de desventajas o dificultades de grupos vulnerables, con el fin de asegurar su permanencia en el sistema educativo.

I.7.5.2. Mejorar los programas de atención a la población con rezago educativo.

I.7.5.3. Incrementar la calidad de los contenidos y medios educativos.

I.7.5.4. Fortalecer la participación de padres, madres de familia, tutores y personal docente en el sistema educativo, garantizando la libertad educativa que impulse la innovación pedagógica y la vigencia del principio constitucional del interés superior de la niñez.

I.7.5.5. Garantizar que hombres y mujeres tengan acceso por igual a la educación en todos sus niveles.

I.7.5.6. Mejorar la educación para la apropiación tecnológica en todos los niveles.

I.7.5.7. Procurar que la educación media y media superior, este vinculada con las actividades productivas mediante esquemas de educación dual, haciendo énfasis en la adquisición de competencias, la valoración del trabajo técnico y la alfabetización digital, como herramientas de estímulo a la inteligencia y la creación.

I.7.5.8. Procurar que la educación superior, estimule y permita la flexibilidad, adaptabilidad, vinculación entre instituciones, internacionalización, investigación y creación del conocimiento, la seguridad jurídica y la seguridad financiera de las instituciones a cargo del Estado.

I.7.5.9. Promover programas de dignificación magisterial, que aseguren el pleno cumplimiento de los derechos de los trabajadores y trabajadoras de la educación y aseguren la capacitación, profesionalización y actualización continua, así como el conjunto de condiciones indispensables que deben cumplirse en cada escuela para el buen desempeño de la tarea docente.

I.7.5.10. Promover la cultura cívica y la formación ciudadana.

I.7.5.10.1. Recuperar el papel de la educación en la formación cívica de la sociedad, con un sentido nacional que fomente la tolerancia y el respeto por la diversidad cultural y las diferencias, tanto al interior de nuestro país como en el contexto de la globalización.

I.7.5.10.2. Educar para la democracia a través de programas que formen en el pensamiento crítico y promuevan los valores democráticos y la formación de una cultura ciudadana.

I.7.6. Establecer una política cultural de Estado que estimule la producción y consumo de bienes y servicios culturales nacionales y estatales que afiance nuestra identidad cultural y proyecte la producción cultural de México y de San Luis Potosí en el mundo.

I.7.6.1. Democratizar el acceso a los bienes y servicios culturales como derechos humanos.

I.7.6.2. Incorporar el enfoque de industrias culturales, en las políticas públicas sobre cultura, y vincularlas con las políticas de desarrollo económico.

I.7.6.3. Fortalecer la diversidad cultural regional del estado, descentralizando los programas culturales, para estimular que las instituciones regionales, municipales y privadas sean

copartícipes en el diseño y financiamiento de las actividades culturales. IV.7.6.4. Promover valores de identidad cultural que promuevan la cohesión social y el orgullo nacional.

I.7.6.5. Promover el desarrollo cultural y la creatividad entre la niñez y la juventud, por medio de la educación y su participación en eventos culturales.

I.7.6.6. Recuperar los espacios públicos promoviendo en ellos programas culturales.

I.7.6.7 Establecer un programa de inversión en cultura, con participación del sector público y privado, para llevar adelante intervenciones culturales en zonas marginadas para influir en la recuperación de los espacios públicos a través de la generación de cohesión social.

I.7.6.8 Promover la generación de cultura a nivel local a través del fortalecimiento de la participación ciudadana y otorgando estímulos y beneficios a los productores.

I.7.6.9 Promover canales comerciales (internos y externos) sin intermediarios para los productos artesanales fabricados por diversas comunidades del estado, con el que se garantice la remuneración justa por el trabajo realizado.

I.7.7. Establecer una política de Estado que fomente la ciencia y la tecnología en el estado, orientándola con visión estratégica a contribuir al desarrollo.

I.7.7.1. Incrementar los presupuestos públicos destinados a la investigación científica y el desarrollo tecnológico, incluyendo programas de divulgación científica y técnica, dándoles continuidad a lo largo del tiempo.

I.7.7.2. Priorizar programas y proyectos de investigación y desarrollo científico y tecnológico orientados al beneficio social.

I.7.7.3 Consolidar una política de ciencia y tecnología de largo plazo, orientada a sectores estratégicos prioritarios y a proyectos socialmente significativos, mejorando el presupuesto asignado a esa área.

I.7.7.4 Promover la vinculación entre la generación de conocimiento (los centros de investigación y el desarrollo científico y tecnológico) con los sectores productivos y con la sociedad.

I.8. Consolidar un sistema de salud universal y de calidad internacional.

I.8.1. Promover una integración verdadera de las instituciones de salud que elimine la actual fragmentación de la atención a la salud, constituyendo un Fondo Único para la Salud. IV.8.2. Transitar hacia un modelo que priorice la prevención de las enfermedades, fortaleciendo los programas de educación para la salud y prevención en la atención primaria, dotándolos de recursos suficientes.

I.8.3. Fortalecer la figura del médico general.

I.8.4. Establecer un programa integral de consulta y hospitalización en domicilio.

I.8.5. Crear condiciones para propiciar una mejor distribución regional de la infraestructura y los recursos profesionales para la atención a la salud.

I.8.6. Revisar el sistema de formación médica, buscando jornadas más humanas que reduzcan los riesgos asociados a la falta de descanso de los médicos internos de pregrado y los residentes médicos de especialidad.

I.8.7. Garantizar el abastecimiento de medicamentos en la red hospitalaria pública a partir de convenios con farmacéuticas para crear un sistema de surtido por prescripción de dosis exactas, para eliminar desperdicios.

I.9. Formular una política de vivienda con enfoque de derechos humanos, para que las y los mexicanos gocen de vivienda digna, calidad, acorde con sus necesidades, convivencia comunitaria y acceso a internet.

I.9.1. Desarrollar soluciones habitacionales urbanas asequibles para la población, localizadas en zonas que permitan reducir los tiempos de traslado entre los hogares y los centros de actividad laboral y otras.

I.9.2. Implementar acciones y promover nuevas normas jurídicas para impedir la especulación desmedida de los suelos para vivienda urbana.

I.9.3. Crear un programa que proporcione asistencia técnica para esquemas de autoconstrucción y extensión de vivienda.

I.9.4. Instrumentar un Sistema estatal de Vivienda, e incrementar el número de créditos que puedan disponer sus derechohabientes.

I.10. Elaborar un plan integral de desarrollo de la infraestructura de transporte urbano e interurbano con visión de largo plazo.

I.10.1. Promover un mayor uso de los ferrocarriles en el transporte de carga, sobre todo en las corridas largas.

I.10.2. Establecer un amplio programa de caminos intensivos en mano de obra para comunicar a comunidades aisladas.

I.10.3. Privilegiar las soluciones de transporte público en los centros urbanos.

I.10.4. Intensificar las tareas de mantenimiento de la infraestructura de transporte ya existente.

I.10.5. Eliminar la discrecionalidad y la falta de transparencia (corrupción) en las licitaciones de las obras de infraestructura de transporte.

I.11. Velar por una pensión suficiente para el retiro digno de trabajadores y trabajadoras al servicio de la administración pública local.

I.11.1. Incrementar las aportaciones para el fondo de retiro.

I.12. Establecer políticas públicas transversales que garanticen los derechos de las mujeres, los niños, niñas y jóvenes, las personas adultas mayores y las personas con discapacidad; con un enfoque de inclusión social, sin discriminación o algún tipo de violencia.

I.12.1. Establecer políticas públicas para garantizar la atención prioritaria para el pleno ejercicio de los derechos de las personas que debido a la desigualdad enfrentan discriminación, exclusión, maltrato, abuso, violencia y mayores obstáculos para el pleno ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales.

I.12.2. Afirmar un criterio de transversalidad de género en el diseño, aplicación y evaluación de las políticas públicas.

I.12.3. Garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, a través de políticas públicas encaminadas a prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra ellas.

I.12.4. Garantizar el enfoque de juventud en las políticas públicas, e impulsar la participación de las y los jóvenes en el diseño, instrumentación y evaluación de éstas.

I.12.4.1. Garantizar el acceso de las y los jóvenes a la educación y la capacitación, promoviendo que desarrollen una actitud emprendedora y creativa.

I.12.4.2. Promover mecanismos de inserción laboral, económica, política, social y cultural de las personas jóvenes en México.

I.12.5. Establecer políticas públicas que promuevan una calidad de vida digna y saludable para las personas adultas mayores, con un enfoque de derechos humanos.

I.12.6. Implementar políticas públicas orientadas a garantizar los derechos políticos, económicos, sociales y culturales de los pueblos indígenas y erradicar su marginación social y económica.

I.12.6.1. Desarrollar programas para apuntalar la cultura y usos y costumbres de las comunidades indígenas, sin más límite que el respeto al marco legal del país, a los derechos humanos, a la equidad de género y a la igualdad de oportunidades para sus integrantes.

I.12.6.2. Instrumentar estrategias de desarrollo que permitan sacar del atraso y de la pobreza a nuestras comunidades indígenas, respetando su cultura y usos y costumbres.

I.12.7. Promover la inserción social y económica de las personas con alguna discapacidad, y adecuar la infraestructura pública y privada para contribuir a dicho propósito.

I.12.7.1. El diseño y la elaboración de las políticas públicas para las personas con discapacidad, debe sustentarse en una nueva visión en donde se resalten sus valores, capacidades y derechos, con el firme objetivo de erradicar las viejas prácticas asistencialistas y se promueva en todo momento las oportunidades reales de superación y se promueva una cultura de respeto y su inclusión en la sociedad.

I.13. Fortalecer la libertad y democracia sindicales, y las instancias de defensa de justicia laboral. Y dismantelar el sindicalismo corporativo adscrito a partidos políticos, gobiernos y a grupos de interés contrarios a los intereses de la sociedad.

I.14. Garantizar los derechos laborales de las personas que trabajan en la maquila y realizan labores en el hogar.

I.15. Implementar mecanismos en el ámbito del trabajo que permitan avanzar en la conciliación de la vida familiar con la vida laboral.

I.16. Promover el acceso universal a las tecnologías de la comunicación y la información como un derecho, reduciendo la brecha digital.

I.16.1. Impulsar el desarrollo de ciudades y pueblos digitales.

I.16.2. Promover el derecho a la privacidad y la seguridad cibernética.

I.16.2.1 Establecer políticas y herramientas que garanticen la seguridad de los datos personales, la información, las transacciones y la privacidad en las redes digitales.

I.16.3. Defender la libertad de expresión sin censura gubernamental en las redes sociales digitales.

I.16.4. Establecer una amplia agenda digital para el desarrollo económico que contribuya a profundizar la inclusión financiera y el desarrollo de la economía digital.

I.17. Medio ambiente y desarrollo sostenible.

I.17.1. Poner al desarrollo sostenible en el centro de la estrategia de desarrollo estatal.

I.17.2. Incorporar los principios de justicia intergeneracional, precautorio, evaluación ambiental estratégica y el que contamina paga para toda explotación de los recursos naturales o cualquier tipo de proyecto productivo, recreativo o turístico.

I.17.3. Fortalecer el marco jurídico y las instituciones encargadas de salvaguardar los ecosistemas del estado y de revertir su degradación, así como de cuidar el medio ambiente y la protección a los animales.

I.17.4. Instrumentar políticas de Estado que aseguren que el estado colabore con los compromisos internacionales en materia de cambio climático y calentamiento global, así como de protección de la biodiversidad, de los que México forma parte.

I.17.5. Incorporar en las políticas de desarrollo económico consideraciones de sostenibilidad ambiental.

I.17.5.1. Integrar a las comunidades en el diseño, ejecución y supervisión de los planes y proyectos de desarrollo que afectan los recursos naturales de sus localidades, respetando sus derechos, formas de vida, usos y costumbres, desde un enfoque intercultural.

I.17.5.2. Los proyectos de desarrollo turísticos y de inversión públicos o privados, deberán contar con el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades.

I.17.5.3. Establecer regulaciones para que la explotación de los recursos naturales de pueblos originarios y comunidades indígenas sea sostenible y beneficie a las propias comunidades.

I.17.5.4. Llevar a la práctica el principio de que quien contamina paga en toda explotación de los recursos naturales o proyecto productivo, recreativo o turístico.

I.17.5.5. Impulsar el desarrollo de empresas limpias y ambientalmente sostenibles que contribuyan al desarrollo económico y social del estado, basadas en la explotación racional de los recursos, con evaluaciones ambientales estratégicas, límites de contaminación, gestión de residuos y condiciones saludables para los trabajadores.

I.17.5.6. Fomentar proyectos ambientalmente sostenibles en zonas marginadas, evitando prácticas de explotación irracional que ponen en riesgo sus recursos naturales.

I.17.5.7. Promover el turismo ambientalmente sostenible y comprometido con el desarrollo de las comunidades locales.

I.17.5.8. Impulsar vínculos de cooperación internacional que favorezcan el intercambio y desarrollo de nuevas tecnologías que mejoren la producción industrial y resulten amigables con el medio ambiente

I.17.5.9. Establecer impuestos ecológicos.

I.17.6. Favorecer esquemas financieros de apoyo a los centros de investigación e instituciones educativas, para realizar estudios específicos sobre medio ambiente y biodiversidad.

I.17.7. Poner en marcha acciones que detengan la sobreexplotación y contaminación de los acuíferos del estado (y en lo posible los recuperen), aprovechando racionalmente el agua y garantizando su abasto suficiente en las distintas regiones del estado.

I.18. Fortalecer y supervisar el cumplimiento de los planes de ordenamiento territorial.

I.18.1. Crear un nuevo modelo de desarrollo urbano y territorial en el país, con la participación y vigilancia de la sociedad, que fomente la creación de poblaciones y la adecuación de las ya existentes, bajo criterios de sostenibilidad, viabilidad y resiliencia en materia de crecimiento ordenado, asentamientos humanos, seguridad, protección civil, infraestructura, servicios públicos, transporte, movilidad, y calidad de vida de sus habitantes.

I.18.2. Establecer mecanismos de gestión (coordinación institucional) y gobernanza urbana, y en donde resulte aplicable, de carácter metropolitana.



I.19. Planear e implementar programas de protección civil y prevención de desastres, con participación y corresponsabilidad de los municipios, así como con la participación de la sociedad.